

## 29ª SESION ORDINARIA DEL 18 DE AGOSTO DE 1900

PRESIDENCIA DEL DOCTOR GÁLVEZ

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

II.—Se integra la Comisión de Hacienda con el señor senador Uriburu y la de Presupuesto con el señor senador Carbó.

III.—Aprobación del proyecto, despachado por la Comisión de Negocios Constitucionales, relativo á la autorización para demandar al Poder Ejecutivo.

SEÑORES SENADORES En Buenos Aires, á los

Anadón  
Aparicio  
Avellaneda  
Barbeito  
Cané  
Carbó  
De la Torre  
Díaz  
Doncel  
Figueroa  
Figueroa Alcorta  
García (A. P.)  
García (F. L.)  
Guinazú  
Maciá  
Mantilla  
Mendoza  
Mitre  
Pérez  
Uriburu

diez y ocho días del mes de agosto de mil novecientos, reunidos en su sala de sesiones el señor Vicepresidente y los señores senadores al margen consignados, se abre la sesión con inasistencia de los señores Igarzábal y Pellegrini con licencia; Benegas, Mitre, Morón y Virasoro con aviso; Barraza, Herrera y Zavalía sin aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior, de 16 del corriente (28ª ordinaria), se da cuenta de los

### I

#### ASUNTOS ENTRADOS

#### COMUNICACIONES OFICIALES

La Cámara de Diputados remite el proyecto de ley, en revisión, modificando la ley de 14 de septiembre

de 1863, sobre procedimiento ante los tribunales federales

—A la Comisión de Legislación.

#### PETICIONES PARTICULARES

El presidente del Colegio de Procuradores de la Capital solicita se sancione el proyecto de ley presentado por el senador Guinazú, por el cual reglamenta el ejercicio de la procuración.

—A sus antecedentes.

### II

**Sr. Presidente** — Debiendo integrarse la Comisión de Hacienda, por licencia concedida á uno de sus miembros, designo á ese efecto al señor senador Uriburu, y para integrar la de Presupuesto al señor senador Carbó.

### III

—Se lee:

*Honorable Senador:*

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha estudiado nuevamente el proyecto relativo á la auto-

rización para demandar al Poder Ejecutivo, y os aconseja su sanción en particular en los siguientes términos.

#### PROYECTO DE LEY

Artículo 1º—Los tribunales federales conocerán de las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica, sin necesidad de autorización previa legislativa, pero no podrán darles curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo, y su denegación por parte de éste.

Art. 2º—Si la resolución de la administración demorase por más de seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los tribunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos.

Art. 3º—La demanda se comunicará por oficio al Poder Ejecutivo, por conducto del ministerio respectivo y al procurador fiscal, el cual deberá proceder previa consulta y con sujeción á las instrucciones que le transmita dicho ministerio.

Art. 4º—El término para contestar será de treinta días, y el mayor que corresponda según las distancias con arreglo á las leyes vigentes si la demanda se dedujere fuera del territorio de la capital de la República.

Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias que correspondan.

Si se interpusiesen éstas, el término para contestar la demanda, una vez resueltas, será de quince días.

Art. 5º—La Suprema Corte conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces federales en los casos á que se refiere la presente ley, según el procedimiento señalado para la tramitación de las apelaciones concedidas libremente.

Art. 6º—Las decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando sean condenatorias contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda. Sala de la Comisión, agosto 12 de 1900.

*Domingo T. Pérez.—J. Figueroa Alcantara.*

**Sr. Presidente.**—Está en discusión general.

**Sr. Pérez.**—Pido la palabra.

Ya, cuando por primera vez vino este asunto á la consideración del Senado, tuve el honor de exponer en general las razones que la Comisión de Negocios Constitucionales había tenido para aconsejar la sanción de un proyecto de esta naturaleza, que permitiera, en determinados casos, demandas contra la Nación sin necesidad de la venia previa del Congreso.

La Comisión mantiene su criterio sobre el particular, y solamente debe ex-

poner los motivos que ha tenido para modificar el proyecto en particular y dar las razones de dicha modificación.

Como se ve, la idea fundamental se mantiene y se halla comprendida en el artículo 1º, que fué motivo de las observaciones hechas por el señor senador por Córdoba y que determinaron la sanción de la moción para que el asunto volviera á estudio de la Comisión.

La primera dificultad surgió á propósito de la inteligencia que se debía dar á las palabras «en su carácter de persona jurídica», cuyo concepto, efectivamente, no estaba bien claro puesto que el artículo en discusión decía que debía permitirse las demandas en los casos en que el Poder Ejecutivo, en su carácter de persona jurídica, había desconocido el derecho de los interesados; cuando lo que se quería decir era que procedían estas demandas en los casos en que la Nación se hubiese obligado en su carácter de persona jurídica.

El nuevo artículo propuesto aclara esta idea al determinar que los jueces federales conocerán de las acciones civiles que se instauren, entendiéndose que en dichas acciones civiles se hallan comprendidas las comerciales y de minería.

El artículo 2º es nuevo. El importa una garantía que se da á los particulares para el caso en que el Poder Ejecutivo, por cualquier razón, demorara por más de nueve meses la resolución de la gestión que debe hacerse previamente ante él, por los derechos que se reclaman. Primero se establece un plazo de seis meses, para que durante él pueda la administración resolver el asunto, debiendo el interesado requerir su pronto despacho en los casos en que en ese lapso de tiempo no hubiese sido resuelto el reclamo; dando todavía un plazo de tres meses para que recién pueda ir el interesado directamente ante los tribunales federales.

El artículo 3º también es nuevo, y su objeto es rodear estos asuntos de todas las garantías que deben revestir, á fin

de que el Poder Ejecutivo, desde el primer momento, **tenga** conocimiento directo de la demanda que se va á **entablar** contra él; para evitar que los procuradores fiscales, por omisión, negligencia ú otras causas no las atiendan con la debida contracción y pongan de su parte todo el esfuerzo necesario, á fin de defender ampliamente los derechos de la Nación, á cuyo efecto deben recibir las instrucciones del respectivo ministerio.

El artículo 4º también es nuevo, y en esta parte modifica la ley general de procedimientos, dada la naturaleza especial de estos asuntos, estableciendo plazos más largos para contestar la demanda y las excepciones dilatorias que puedan presentarse en el curso del juicio.

El artículo 5º no hace sino reemplazar al 2º del primer despacho de la Comisión, en cuanto establece que deben ser concedidas las apelaciones libremente. En el artículo 2º se prescribía que la Corte debía entender en juicio pleno. La idea es la misma, pero aquí está más claro y más conforme con las leyes vigentes sobre procedimientos.

El artículo 6º reemplaza al 3º del primitivo proyecto, en cuanto determina que las decisiones de los tribunales federales se limitarán á la simple declaratoria del derecho en los casos en que la Nación fuere condenada.

Se ha suprimido la declaración en los casos de la negación del derecho de los particulares, para que no se vaya á creer que éstos no se hacen responsables de las demás consecuencias del juicio.

Estas son las razones que ha tenido la Comisión para aconsejar estas modificaciones, habiéndose puesto de acuerdo y conferenciado largamente con el distinguido señor senador por Córdoba, que hizo ciertas observaciones cuando este asunto se trató en particular.

He dicho.

—Se vota y aprueba en general el proyecto.

—Se lee el artículo 1º.

**Sr. Guñazú**—Pido la palabra para solicitar un esclarecimiento sobre la primera parte de este artículo. Habla de tribunales federales.

Comunmente se entiende por tribunales federales aquellos á los que compete entender, de acuerdo con nuestra Constitución y las leyes de procedimientos del 63, en ciertas y determinadas materias. Como se dice también *jueces de sección, juzgado federal ó jueces nacionales*, con más ó menos propiedad, podría ocurrir que una demanda contra la Nación tenga que entablararse ante el juez de un territorio nacional, cuando la naturaleza del contrato ú otra razón legal vengán á conferir jurisdicción á dicho magistrado.

Y puesto que tratamos ahora de señalar cuáles jueces ó de cuál fuero son los que deben entender en estos juicios, considero muy oportuno establecer este punto con la mayor claridad posible.

La Comisión puede ó no pensar que las palabras «jueces federales» han de tomarse en este caso en el sentido restrictivo y con exclusión de los jueces de los territorios nacionales.

Deseo oír algunas explicaciones del señor miembro informante.

**Sr. Pérez**—Se le ha dado precisamente este carácter. La Comisión cree que están comprendidos también, desde que siempre hay apelación ante la Suprema Corte, que es donde está la verdadera garantía.

**Sr. Cané**—Pido la palabra.

Yo no entendí así al votar este artículo; yo entiendo por jueces federales los jueces de sección; por tribunales federales la Suprema Corte, y no de otra manera. Los jueces de territorios nacionales tienen una jurisdicción propia y restrictiva. Tan es así, que en una ley especial sobre territorios nacionales, dictada últimamente por el Congreso, se ha restringido más aún esa jurisdicción de los jueces de territorios, limitándola á asuntos de determinada cantidad, pasando los asuntos, cuando

exceden de cierta suma, á la jurisdicción del juez federal más próximo al territorio, como se estableció en la ley dictada últimamente para el territorio de Los Andes.

Creo que una demanda hecha contra el Poder Ejecutivo bien merece la pena de que se entable ante un juez federal, y que el que va á hacerla, si está en territorio federal, se traslade al punto más próximo donde exista un juez federal ó de sección. Así he entendido por mi parte al votar el artículo.

**Sr. Guñazú**—Pido la palabra.

Me felicito de haber provocado esta discusión, porque veo que no hay un perfecto acuerdo entre los señores senadores, sobre el verdadero alcance de la primera parte de este artículo.

Para evitar conflictos y dificultades, para no fomentar pleitos motivados por ambigüedades de una sanción poco explícita, todos hemos de convenir en que las leyes deben ser redactadas con toda la pureza y claridad posibles, evitando el empleo de frases ó palabras de doble sentido.

El señor senador por la Capital ha dicho muy bien que por juez federal ha de entenderse jueces de sección exclusivamente; pero la comisión, sostenedora de su despacho, piensa lo contrario; y como, por otra parte, se confunde vulgarmente, siguiendo quizás una corruptela de la palabra del lenguaje forense, á los verdaderos jueces federales con los que funcionan en los territorios, acaso porque estos últimos tienen jurisdicción para conocer de materias sujetas al fuero federal, conforme lo establece su propia ley orgánica, necesito insistir en la necesidad de fijar netamente el verdadero alcance del artículo en discusión.

El señor senador informante piensa que la Nación puede ser demandable ante dichos funcionarios y que no existe peligro alguno en sancionarlo así; mas yo tengo dudas sobre este punto, confesando con franqueza que carezco de

opinión firme. Puede ser que avanzando esta discusión logre disipar mis temores.

Preciso es recordar que debemos ser muy cautelosos en la designación de los tribunales que han de conocer en la primera instancia de estos juicios, que afectan nada menos que el crédito de la Nación, aunque la cuantía pecuniaria de los bienes litigados pudiera ser relativamente insignificante en la mayoría de los casos.

Estos jueces territoriales, cuyos actos escapan á una fácil y buena fiscalización, ya de su superiores jerárquicos, ya del foro ó de la opinión pública, no reúnen condiciones suficientes como para confiarles la decisión de pleitos que comprometan valiosos intereses materiales ó morales.

Dichos magistrados tampoco presentan las garantías que surgen de la preparación científica exigida por la ley para el nombramiento de un juez federal.

**Sr. Pérez**—Las mismas.

**Sr. Guñazú**—Nó, señor; está equivocado el señor senador: para ser juez federal se necesita tres años de práctica en el ejercicio de la profesión, y para juez de territorio nacional basta ser mayor de edad y tener título profesional.

**Sr. Mantilla**—Y el uno es nombrado por tiempo determinado y el otro es inamovible.

**Sr. Guñazú**—También eso: los de territorios son nombrados por sólo cuatro años, mientras que los del fuero federal son inamovibles durante su buen comportamiento.

De manera que estas diferencias son muy remarcables, y en el mismo sentido las garantías que unos y otros ofrecen.

**Sr. Pérez**—La Comisión, si se quiere limitar esta facultad á los jueces federales de la Capital y de sección de las provincias, no va á hacer cuestión.

Ya he expresado el pensamiento que ha dominado en la Comisión respecto

al alcance de este artículo en esta parte; pero, como ha querido restringir en esta ley todo lo posible la libertad para demandar al Poder Ejecutivo, no tengo inconveniente en que se resuelva limitar esta facultad á los jueces federales de la Capital y de las provincias, aunque los ciudadanos de los territorios nacionales tengan que venir aquí ó ir á la provincia más cercana, con todos los inconvenientes que importa ese viaje, á entablar la demanda.

**Sr. Uriburu**—Tienen que venir de todos modos para hacer la demanda ante la Corte.

**Sr. Pérez**—Eso sería en el caso de apelación.

**Sr. De la Torre**—Pido la palabra.

Yo pienso por mi parte, señor Presidente, que el artículo está bien como está y que las dudas que se suscitan tienen su solución en las leyes orgánicas que reglan la extensión y naturaleza de la jurisdicción de los tribunales actualmente existentes.

El proyecto que se discute no modifica ni está destinado á modificar esa jurisdicción, y si, según aquellas leyes, los jueces de los territorios ejercen, dentro de sus respectivos distritos, jurisdicción federal y la ejercen con la misma amplitud que los jueces de sección, no puede haber duda de que ellos serán competentes para el conocimiento y decisión de las causas á que el proyecto se refiere.

Si por el contrario, esas leyes no les defieren tal clase de jurisdicción, es claro que carecerían de la necesaria competencia para conocer de ellas y estarían inhibidos para entender en toda demanda contra la Nación.

No es esta la oportunidad de aclarar ni variar la legislación jurisdiccional, que el Congreso tiene dada, y que se halla en completo vigor. Por mi parte, no tengo dudas acerca de su alcance y creo que no hay peligro en dejar librado exclusivamente á sus disposiciones el punto en cuestión, es decir, si los jueces de los territorios pueden ó no

entenderse comprendidos entre los tribunales del orden federal ó que ejercen la jurisdicción federal.

Pienso, además, que si cuando la Nación obra como parte actora no está eximida de hacerlo ante aquellos jueces y aun se halla compelida á ocurrir á ellos, si el fuero del contrato ó el fuero personal del demandado así lo impone, no hay razón para que haya de dejar de estarlo, cuando en lugar de demandante sea demandada.

Si dichos jueces no ofrecen peligro á los intereses de la Nación en un caso, no deben ofrecerlo en el otro.

En todo caso, si conviene á los intereses de la buena administración de justicia reformar la legislación vigente desapoderando á los actuales jueces de los territorios del conocimiento de los asuntos del fuero federal, y creando otros nuevos en su reemplazo, que se haga; pero, mientras ello no se verifique, no debe cercenárseles la jurisdicción que actualmente ejercen en los casos en que el fisco es parte, porque no hay interés que lo reclame.

Nada más.

**Sr. Presidente**—Si no se hace uso de la palabra, se va á votar si se aprueba ó no el artículo 1º.

**Sr. Guñazú**—Pido la palabra.

Como hay anarquía también en las ideas manifestadas por los señores senadores por Córdoba y la Capital, sobre puntos un poco delicados, no creo conveniente provocar ya la votación de este artículo sin tratar primero de saber cuál es el alcance de él mismo, y cuál el pensamiento neto de la Comisión.

**Sr. Pérez**—El pensamiento de la Comisión es que los jueces de territorios tienen jurisdicción.

Ahora, si el señor senador desea, puede proponer una modificación restringiendo esa atribución.

**Sr. Guñazú**—La Comisión entiende que en la palabra *tribunales*...

**Sr. Pérez**—Están comprendidos los de los territorios nacionales.

**Sr. De la Torre**—La Comisión no

hace reforma alguna, á mi entender, en lo que se refiere al sistema jurisdiccional vigente: deja las cosas como están; de suerte que, si siguen esa legislación actual, los jueces de territorios ejercen jurisdicción federal.

**Sr. Mantilla**—Pido la palabra.

Yo soy de la manera de pensar del señor senador por la Capital y no me es fácil entender por qué, según la opinión de la Comisión de Negocios Constitucionales, el artículo primero comprende á todos los jueces.

Los jueces federales lo son para un fuero especial establecido directamente por la Constitución. Los jueces de la capital de la República y los de los territorios son creados por leyes del Congreso para el fuero ordinario, de jurisdicción y de naturaleza distintas de aquéllos; por eso se ha dicho que «no son los jueces de la Constitución.» De ahí que los unos sean inamovibles por vida y los otros solamente por tiempo determinado.

¿Puede el Congreso atribuir por una ley de esta índole á los jueces ordinarios la competencia que por la Constitución corresponde á los del fuero de excepción? Me inclino á pensar que no.

El artículo 100 de la Constitución pone, entre los casos sometidos á la Corte Suprema y á los tribunales federales, vale decir á la justicia de excepción, «los asuntos en que la Nación sea parte.» Por consiguiente, es á los jueces establecidos para dar cumplimiento á este artículo á quienes corresponden aquéllos y no á los creados para otros fines y en virtud de otras facultades del Congreso.

Según esto, que me parece claro, cuando el artículo primero del proyecto emplea los términos *tribunales federales*, necesariamente se ha referido á la magistratura creada para el fuero de excepción. Así lo entiendo yo, y, á lo menos por el momento, no me doy cuenta de la comprensión mayor que le atribuye la Comisión.

**Sr. Pérez**—No le atribuye esa jurisdicción en absoluto.

Como ha dicho el señor senador por Córdoba, eso queda librado á las leyes y disposiciones constitucionales vigentes.

Si hay una causa que por la Constitución y por las leyes debe resolverse en un territorio federal, corresponde á ese juez; y sí, según la Constitución y las leyes vigentes, no corresponde, quiere decir que no irá á él.

**Sr. Cané**—Yo creo que de la discusión que acaba de tener lugar ha surgido la luz, por lo menos en lo que á mi respecta, y veo que en realidad tanto los señores senadores que han comprendido en los términos «tribunales federales» á los jueces de los territorios, como los que no los hemos comprendido, no vemos peligro ninguno en que la ley se sancione así.

En efecto, como acaba de recordar el señor senador por Corrientes, leyendo el artículo 110 de la Constitución, en todas las causas en que el Estado es parte, la jurisdicción es la federal; por consiguiente, nunca irá á ningún juez de territorio una causa en que, demandándose al Poder Ejecutivo, sea el Poder Ejecutivo parte.

No hay peligro de ninguna clase en votar esta ley; y por lo mismo que la Comisión comprende en estos términos á los jueces de territorios, esa comprensión de la Comisión no le da ni le quita jurisdicción.

Así es que podemos votar el artículo con toda tranquilidad de conciencia.

**Sr. Doncel**—El hecho es que el Senado en este momento no está llamado á resolver una cuestión de jurisdicción. Eso está resuelto por las leyes.

**Sr. Cané**—La única duda que puede surgir es la de si los tribunales federales comprenden á los jueces de territorios.

Yo pienso que no.

**Sr. De la Torre**—Pido la palabra.

Creo, señor Presidente, deber persistir en las opiniones que tengo manifes-

tadas. Hay una doble salvedad que hacer á las observaciones del señor senador por Corrientes.

Es la primera: que el Congreso ejerce en el territorio de la Capital y en todos los territorios nacionales un poder de legislación exclusivo, que le permite organizar á su arbitrio los tribunales de la una como de los otros y acordarles libremente el todo ó parte de la jurisdicción que el señor senador atribuye exclusivamente á los jueces federales, habiendo así podido en esta Capital, si lo hubiese tenido á bien, prescindir por completo de la creación de tribunales federales al tiempo de organizar su administración judicial; y es la segunda: que el Congreso no tiene tampoco limitación alguna para crear tantos tribunales inferiores á la Suprema Corte cuantos encuentre convenientes ó reputé necesarios al buen servicio de la administración de justicia y delegar en ellos ó distribuir entre ellos toda la jurisdicción que deriva del artículo 100 de la Constitución.

Pudiera haber duda si puede deferirla á tribunales del orden provincial; pero no puede haberla absolutamente respecto á tribunales de creación del propio Congreso. De suerte, que de uno como de otro punto de vista, puede afirmarse con seguridad que el Congreso no está inhibido de investir, como de hecho lo ha verificado, á los jueces de los territorios con toda la plenitud de la jurisdicción federal.

Si para el futuro se proyecta, como, si no lo he entendido mal, acaba de expresarlo el señor senador por la Capital, alguna limitación al ejercicio de esta jurisdicción, ello no afecta la que aquellos jueces tienen en la actualidad por las leyes del Congreso.

Quería decir esto simplemente para evitar equívocos á que las palabras del señor senador pueden prestarse.

**Sr. Presidente**—Si no se hase uso de la palabra, se va á votar el artículo 1º.

**Sr. Guñazú**—Pido la palabra.

Hago moción para pasar á un cuarto habido equivocación.

intermedio, con el objeto de armonizar las ideas, porque hay verdadera anarquía; y, al mismo tiempo ver si es posible corregir el artículo en discusión.

**Sr. Uriburu**—Me parece que no hay tal anarquía.

**Sr. Pérez**—Se puede aclarar el concepto, diciendo que es á los jueces federales á quienes corresponde la jurisdicción, con excepción de los jueces de territorio.

**Sr. Guñazú**—Más aumenta mi confusión, señor Presidente, cuando, como lo dije, se advierte disconformidad de pareceres entre las opiniones de los señores senadores por Córdoba, la Capital y Corrientes, cuya competencia científica todos reconocemos.

El señor senador por Salta cree, sin embargo, que la cuestión es sencilla y que no existe discrepancia de ideas; yo no participo de su modo de pensar, porque la disconformidad está latente y manifiesta,

**Sr. Uriburu**—Pero, señor senador, si todos declaran que, puesta la ley en la forma en que está, no altera nada, votando este artículo no hay peligro ni hay anarquía posible: porque no ha llegado el caso de que la anarquía se produzca.

La jurisdicción será ejercida según la ley lo determine, y entonces ¿qué estamos haciendo?

Sería necesario modificar esta ley en todo sentido; pero la modificación no tiene objeto, puesto que estamos de acuerdo en que las atribuciones de esta y las de los tribunales hacen que no haya anarquía posible.

Yo creo que debemos votar.

**Sr. Presidente**—El señor senador por Mendoza ha hecho una moción de orden. ¿Insiste en ella?

**Sr. Guñazú**—Sí, señor.

**Sr. Presidente**—Se va á votar.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Mantilla**—Me parece que ha habido equivocación.

**Sr. Presidente**—Se rectificará la votación.

—Se rectifica y resulta afirmativa de once votos.

**Sr. Presidente**—Invito al Senado á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace.

—Vuelto á sus asientos los señores senadores, dice el

**Sr. Presidente**—Continúa la sesión.

**Sr. Pérez**—Parece que este cuarto intermedio no ha sido infructuoso y me felicito, tanto más cuanto que resulta que, al hablar en nombre de la Comisión, tenía razón al afirmar que, tratándose de tribunales federales, deben entenderse comprendidos los jueces letrados de territorios, porque la ley sobre la administración de los territorios ya ha reglamentado el punto en su artículo 36, estableciendo que estos jueces conocerán en todos los asuntos de carácter civil, comercial, criminal, y aun en aquellos que corresponden á los jueces federales, pero con una limitación establecida en el artículo 42, como una garantía precisamente en favor de estas causas en que la Nación es parte. Así es que en la conferencia que hemos tenido en el cuarto intermedio se ha convenido en establecer de una manera terminante en el artículo 1º que los jueces de territorios tienen jurisdicción en esos casos, agregando al final de la ley uno, que es el mismo que figura como 42 en la ley de los territorios federales, que dice así: « Los jueces letrados de territorios nacionales elevarán en consulta ante la Corte Suprema, aun cuando no se interponga apelación en todas las sentencias definitivas que pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley. »

Como un antecedente á este artículo, sería menester agregar al artículo primero lo que he manifestado: que los jueces letrados de territorios nacionales conocerán en todos los asuntos de carácter civil, comercial, etc. Así que pro-

pongo esta modificación, que salva todas las dificultades.

—Apoyado.

**Sr. Presidente**—Está en discusión el artículo 1º, con el agregado propuesto por la Comisión.

—Se vota y es aprobado.

—Se lee el 2º.

**Sr. García (F. L.)**—Pido la palabra para proponer á la Comisión reducir á seis meses el plazo que se acuerda en este artículo.

Parece, señor Presidente, que el alcance de este artículo es dejar establecida una forma para la tramitación administrativa, y como no hay propiamente juicio contencioso administrativo reglamentado por ley, bastaría que después de seis meses de iniciado un reclamo ante la administración, pudiese la parte interesada, si no hay resolución, ocurrir á los tribunales federales.

La limitación del plazo tiene además la ventaja de evitar que pueda perjudicarse el derecho de la parte para interrumpir la prescripción de alguna acción.

Propongo, pues, esta forma: « Si la resolución de la Administración demorase seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, la acción podrá ser llevada directamente ante los tribunales, aceditándose el transcurso de dicho plazo. »

**Sr. Pérez**—Este artículo había sido precisamente redactado en la misma forma que lo propone el señor senador y sometido á la consideración de la Comisión cuando discutimos de nuevo este proyecto; pero mis colegas, como uno de los ministros de la Nación, que se encontraba presente, hicieron la observación muy atendida de que muchos de los asuntos no se resolvían por el Poder Ejecutivo administrativamente, porque carecía de todos los elementos y antecedentes de información que le permitiera formar criterio completo, y, en-



tonces, debía dársele mayor amplitud á fin de que resolviera estos asuntos.

Podría, efectivamente, suceder que en esos seis meses, ya fuera por motivos ajenos á la voluntad del Ejecutivo ó por otras causas, se demorase la resolución; y, para recordarle el deber en que está de solucionar, se ha puesto este segundo plazo de tres meses, después del requerimiento que el interesado debe hacer al Ejecutivo.

De manera que esta es una garantía que se da en favor de la Nación, á fin de que no sea llevada á los tribunales antes de que se le hayan facilitado todos los medios para la resolución del asunto y evitar pleitos en caso de que resolviere favorablemente. Esta es la razón que ha tenido la Comisión y no puede perjudicar á los interesados, porque la prescripción nunca correrá desde el momento que se haya iniciado el reclamo y no podrá computarse para la prescripción que estuviera pendiente de esta gestión.

**Sr. García (F. L.)**—Cuando hayan causas reales, cuando la administración tenga motivos para demorar la resolución, la misma parte está interesada en esperar. Quedaría habilitada para recurrir á los tribunales después de un término señalado, sin que sea necesario requerir el pronto despacho del asunto.

Con este propósito he hecho la observación.

**Sr. Figueroa** — Lo que hay es que muchas veces el Poder Ejecutivo no tiene conocimiento del asunto, porque está durmiendo en las oficinas ó anda pasando de la Oficina de Tierras al Departamento de Obras Públicas ó á la del Correo; en fin, tramitando, y el plazo de seis meses se ha vencido, sin que el Ejecutivo haya tenido conocimiento; entonces viene muy bien el requerimiento. Cuando éste venga, el Ejecutivo estará apercibido; no hay perjuicio ninguno; es una garantía para el mismo Poder Ejecutivo; éste se renueva en sus ministros, y las mismas oficinas

públicas no son muy celosas en el despacho de estos asuntos.

**Sr. Pérez**—Será rarísimo que llegue este caso; porque, además de la instancia oficial, vendrá la particular, que facilitará la resolución del asunto antes de los seis meses.

**Sr. Presidente**—Se va á votar el artículo tal como lo propone la Comisión; si fuera rechazado, se votará tal como lo propone el señor senador por Tucumán.

—Se vota y resulta afirmativa, así como el 3º y 4º.

—Se lee el artículo 5º.

**Sr. Guñazú**—Pido la palabra.

La parte última de este artículo me presenta alguna dificultad. Entiendo que la mente del artículo no es acordar recursos apelatorios solamente contra la sentencia definitiva que finaliza el litigio, sino que también procede apelación contra resoluciones interlocutorias, que causen perjuicio irreparable. Para estos últimos casos no creo que la apelación haya de otorgarse libremente, introduciendo así una verdadera novedad en la legislación vigente, y sin suficiente motivo, según mi parecer.

**Sr. Pérez**—Nada más: esa es la mente del artículo.

**Sr. Guñazú**—¿Lo dice así?

**Sr. Pérez**—Sí, señor.

**Sr. Guñazú**—¿De manera que está librado al criterio exclusivo del juzgado de 1ª instancia toda la organización del proceso, abrir ó no á prueba la causa y su resolución; ó cualquier otra resolución de causa incidental no tiene más fallo que el expedido en primera instancia?

**Sr. Pérez**—No, señor.

**Sr. Guñazú**—Permítame, no puedo coordinar mis ideas. El señor miembro informante de la Comisión dice que sólo se puede apelar de la sentencia definitiva.

**Sr. De la Torre**—Es que esta ley no modifica en nada las leyes vigentes sobre los recursos.

**Sr. Guñazú**—Es que la primera parte del artículo no guarda mucha concordancia con la mente del mismo artículo.

Voy á leerlo:

«Artículo 5º—La Suprema Corte conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces federales.» *Contra las resoluciones definitivas*, dice. Hay resoluciones de carácter interlocutorio que revisten el carácter de definitivas á la vez. Esto es fuera de cuestión, y puede ser objeto de apelación, y debe serlo en relación únicamente.

**Sr. Mantilla**—¿Quiere que de todo haya apelación?

**Sr. Guñazú**—De todo lo que es apelable según las leyes de procedimientos de la justicia federal que están en vigencia.

Esa es mi idea.

**Sr. Cané**—Esó es lo que dice el artículo.

**Sr. Pérez**—Sólo que debe ser concedida libremente para los casos de sentencia definitiva.

**Sr. Guñazú**—¿Entiende el señor senador que no hay apelación en relación?

**Sr. Pérez**—De la sentencia definitiva no hay apelación. Se concede libremente la apelación de todas las resoluciones apelables.

**Sr. Presidente**—¿El señor senador propone alguna modificación?

**Sr. Guñazú**—No, señor; podemos seguir adelante.

**Sr. Presidente**—Se va á votar el artículo 5º.

—Se vota y es aprobado, pasándose á considerar el artículo 6º

**Sr. Mantilla**—Pido la palabra, un poco tarde tal vez.

Conviene agregar en el artículo 5º lo que hemos puesto en el primero: «jueces federales y de territorios nacionales.»

El artículo 5º votado dice: «las re-

soluciones definitivas de los jueces federales.»

**Sr. Figueroa**—Aquí también corresponde la modificación.

**Sr. Pérez**—Para ser consecuente, podrá suprimirse la palabra «federales»; así quedarían comprendidos todos.

**Sr. Presidente**—Como el artículo está sancionado, esto importa una reconsideración.

Se va á votar si se reconsidera el artículo 5º.

—Se vota si se reconsidera y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente**—Está en discusión la indicación sobre la supresión propuesta de la palabra «federales», del artículo 5º.

—No haciéndose uso de la palabra, se vota si se suprime la palabra indicada y resulta afirmativa.

**Sr. Figueroa**—Me parece que aquí correspondería la colocación del artículo que indiqué como último, pues habla de la apelación.

**Sr. Presidente**—Se va á leer el artículo.

—Se lee:

Los jueces letrados de los territorios nacionales elevarán en consulta á la Suprema Corte, aunque no se interpongan apelaciones, todas las sentencias definitivas que pronuncien en los casos á que se refiere la presente ley.

**Sr. Pérez**—Podría ponerse en vez de «presenten», «comprende»

—Se vota el artículo y es aprobado con la modificación, pasándose á leer el 6º (ahora 7º).

**Sr. de la Torre**—Pido la palabra. Me ocurre, señor Presidente, en este momento, que como los artículos hasta aquí sancionados no responden á otro propósito que el de facilitar el ejercicio en juicio de los derechos de los particulares contra la Nación y reglar la situación de ésta como demandada y no como demandante, puede llegar á entenderse que la limitación que este

artículo impone á la acción de los jueces, inhibiéndolos de toda medida de apremio ó ejecución contra los bienes de la Nación. no es tampoco relativa sino á aquella misma situación, ó sea á los casos únicamente en que la Nación aparezca como demandada y no á aquellos en que, siendo ella demandante ó habiendo deducido reconvención en el juicio, resulte condenada en algún capítulo á favor del particular.

Naturalmente que tal pretensión no sería fundada, pues la exención del artículo descansa en razones de orden público, que son de aplicación en todos los casos.

Pero, para mayor claridad, convendría tal vez generalizar el principio en términos bien explícitos, declarándolo aplicable á todas las hipótesis posibles.

**Sr. Pérez**—Pero el artículo, señor senador, dice: «condenatorios contra la Nación.»

**Sr. De la Torre**—En los casos en que ella haya sido demandada.

**Sr. Pérez**—Tampoco exceptúa el caso en que la Nación fuera demandante; se debe entender que es en todos los casos.

**Sr. De la Torre**—Tal vez esto baste

**Sr. Presidente**—Si no se propone ninguna modificación, se votará el artículo tal como lo ha despachado la Comisión.

—Se vota y es aprobado, terminando con ello la aprobación del proyecto

—En seguida se levanta la sesión.

—Eran las 5 p. m.

ARTURO PARODY  
Director de Taquígrafos.